

-URGENTE- REMITO TUTELA PRIMERA INSTANCIA RAD 50001 22 04 000 2022 00216 00

Leydi Milena Calderon Buitrago <lcalderob@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 04/05/2022 8:58

Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>;148-CPMSACS-ACACIAS-5 <jefejuridica.epcacacias@inpec.gov.co>;148-CPMSACS-ACACIAS-6 <juridica.epcacacias@inpec.gov.co>;148-CPMSACS-ACACIAS-4 <epcacacias@inpec.gov.co>



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
SALA DE DECISIÓN PENAL**

Villavicencio, 04 de mayo de 2022

-URGENTE-

OFICIO N° 1584

Señores:

Corte Suprema de Justicia

German Bonilla Martínez

Jefe del área jurídica de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacias - incluye Pabellón de Mujeres

RADICADO	50001 22 04 000 2022 00216 00
ACCIONANTE	GERMAN BONILLA MARTÍNEZ

Cordial saludo, para los fines legales pertinentes LE NOTIFICÓ auto del 03 de mayo de 2022, que ordenó:

Primero. REMITIR POR COMPETENCIA la solicitud de amparo presentada por German Bonilla Martínez a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Segundo. Contra el presente auto no procede recurso alguno.

Tercero. Solicitar al jefe de la Área Jurídica de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacias -incluye Pabellón de Mujeres que disponga lo necesario, para comunicar el presente auto al interno German Bonilla Martínez y envíe la respectiva constancia a lcalderob@cendoj.ramajudicial.gov.co correo institucional establecido para esos fines.

SE SOLICITA AL JEFE DEL AREA JURIDICA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ACACIAS COMUNICAR EL PRESENTE PROVEIDO AL PPL GERMAN BONILLA

MARTÍNEZ.

Atentamente;

LEYDI MILENA CALDERÓN BUITRAGO
CITADORA GRADO IV



Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio- Sala Penal

lcalderob@cendoj.ramajudicial.gov.co

662 56 36/662 17 00

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

ACACIAS-META. Abril 26 de 2022. Folio. 1

SEÑORES. JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
REPARTO DE ACACIAS-META.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

PETICIONARIO. GERMAN GONZALEZ MARTINEZ
C.C. NO: 2231580



28 ABR 2022

EDC/NOV

CONTRA: JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS-META,
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Villavicencio y Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacias-META. Con el propósito
de obtener el amparo de mis derechos
fundamentales a la libertad, al debido
proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la dignidad humana.

Yo mayor de edad GERMAN GONZALEZ MARTINEZ
identificado como aparece al pie de mi firma
y en uso de mis facultades mentales y actuando
en nombre propio, con todo respeto manifiesto
a usted que en ejercicio del derecho de tutela
constitucional en el artículo 86º de la Constitución
política y reglamentado por el Decreto 2591
de 1991, por medio del presente escrito promuevo
acción de tutela.

1. HECHOS:

El día 23 de noviembre de 2021 el juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Alcaldes - meta me nebo la libertad condicional por valoración de la conducta punible, en el cual el juzgado fallador dicto sentencia condenatoria.

1.1. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio. Sala de Decisión Penal No. 1. El día 16 de febrero de 2022 confirmó la decisión.

1.2. El juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Alcaldes el día 21 de abril de 2022 niega por improcedente la acción constitucional de Habeas Corpus.

2. Demanda y solicitud

Presento acción de tutela en contra de las autoridades anteriormente mencionadas con el propósito de obtener el amparo de mis derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana.

Lo anterior, debido a que considero que dichos despachos judiciales al emitir las decisiones del 23 de noviembre de 2021, en primera instancia, del 16 de febrero de 2022, y del 21 de abril de 2022, que niegan el beneficio de la libertad condicional provisional dentro del proceso penal registrado 730013107002 20070004801, incurrieron en (i) un desconocimiento del precepto constitucional y un defecto sustantivo, por interpretación constitucional inadmisibile, en relación con la función resocializadora de la pena y el principio fundamental de la dignidad humana, al considerar que la valoración de la conducta punible ~~por~~ el juez penal abota

El análisis del vez de ejecución; (ii) un defecto sustantivo por evidente contradicción entre los fundamentos de la sentencia de condena y la calificación como "grave" de la conducta punible por parte de los respectivos accionados.

3. La libertad condicional.

La libertad condicional, hace parte de los denominados supuestos penales, por medio de los cuales se permite al sentenciado la sustitución de la pena privativa de la libertad siempre que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma; beneficio a través del cual el legislador ha propendido por garantizar, primero un incentivo para el condenado que ha demostrado su capacidad de adaptación social con el cumplimiento de la sentencia (moral), y segundo, servir de ejemplo al resto de la sociedad. Las privativas de la libertad quienes quieren ver en este supuesto los beneficios que trae consigo la adaptación social que se pretende con la sanción penal impuesta (social).

El estudio para el otorgamiento de la libertad condicional, para el presente caso, se realizó conforme al dispuesto en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, norma vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, la cual prevé como requisitos para conceder la libertad condicional los siguientes:

1. La previa valoración de la conducta (no la gravedad).

2. QUE LA PERSONA HAYA CUMPLIDO LAS 3/5 PARTES DE LA PENA
3. QUE SU ACTUACIÓN, DESEMPEÑO Y COMPORTAMIENTO DURANTE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN PERMITA SUPONER FUNDAMENTEMENTE QUE NO EXISTE DE CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA PENA. (DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR LA OFICINA JURÍDICA DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y QUE REPOSA EN EL DESPACHO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD).
4. QUE DEMUESTRE ADECUADO COMPORTAMIENTO Y SOCIAL. (LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN EL ADECUADO COMPORTAMIENTO Y SOCIAL QUE HAN ALCANZADO AL DESPACHO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LA SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE).

3.1. ES PRECISO INDICAR, NO EXISTE DISCUSIÓN EN CUANTO QUE EL PENADO CUMPLE CON EL REQUISITO OBJETIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO, ES DECIR, SUPERA LAS 3/5 PARTES DE SU PENA QUE EQUIVALE A 187 MESES 11 DÍAS, TOCA VEZ QUE HA ACTUALIZACIÓN HE DESCONTADO 194 MESES 6 DÍAS FISICALS - SE HA RECONOCIDO DE REDUCCIÓN DE PENA A MI FAVOR 46 MESES 17.24 DÍAS; PARA UN TOTAL DE 241 MESES Y 13 DÍAS.

3.2. TENGASE EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014 QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 599 DE 2000, AMPLIA EL OBJETO DE LA VALORACIÓN QUE DEBE HECHAR A CABO, EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS MÁS ALLA DE LA CONDUCTA DE LA CONDUCTA PUNIBLE, EXTENDIÉNDOLA A TODOS A TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MISMA

INCLUSO LA NUEVA DISPOSICIÓN (LEY 1709 DE 2014) EXCLUYE LA REFERENCIA A LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA PUNITIVA, CON LO CUAL EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD QUEDE Y DEBE ENTENDER A VALORAR TAMBIÉN OTROS ASPECTOS Y ELEMENTOS DE DICHAS CONDUCTAS.

LA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA SE DEBE ANALIZAR DESDE EL COMPORTAMIENTO DEL REO EN PRISIÓN Y NO RESPECTO DE LA CONDUCTA POR LA QUE FUE CONDENADO. QUE LA EJECUCIÓN DE LA PENA LA ÚNICA FORMA DE EVALUAR SU PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN, ES QUE SE REALICE UN ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA, TRABAJO, ESTUDIO, FORMACIÓN ESPIRITUAL Y CULTURAL, ENTRE OTROS Y EN SU CASO, PRESENTA UNA CONDUCTA EJEMPLAR, NO EXISTEN INVESTIGACIONES, EN SU CONTRA, NI ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, POR LO QUE SE QUEDE CONCLUIR QUE SU RESOCIALIZACIÓN HA SIDO PROGRESIVA.

LO PLASMADO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1709 DE 2014 NO QUEDE ENTENDESE COMO UN REQUISITO ADICIONAL A LAS TRESITAS EN LOS NÚMEROS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL, SINO, UN PARAMETRO PARA JUZGAR EN CADA CASO LA PERSONALIDAD DEL INTERNO.

3.4 POR LAS CAUSAS, NO QUEDE EL ESTADO DEBIDO DE LA LEY Y OBLIGAR EL QUE COMPORTAMIENTO, QUE HA MOSTRADO EL ENCAJADO DURANTE SU RECLUSIÓN EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO, PUES ESTO SERÍA IR EN CONTRA DE LOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES REFERENTES A LA.

Polvo. 6.
Dignidad Humana y el respeto a garantías
fundamentales que está reclamando en Jesús
por la el accionante, así como sostener que
en la persona del condenado se han realizado
los fines de la pena referidos a su reeducación.

3.5. Adicionalmente, el artículo 4º del Código Penal
señala que la pena, cumplirá funciones de
prevención general, retribución justa, prevención
especial, reinserción social y protección
al condenado y que la prevención especial y la
reinserción operan en el momento de la ejecución
de la pena de prisión. Registra de Colombia
casación 34962 M.P. James Guabán
Vásquez y otras Corte Suprema de Justicia.

3.6. La Corte interpreta que cuando allí se declara
que las funciones de prevención especial y
reinserción social operan en el momento
de la ejecución de la pena de prisión (sea
esta domiciliaria o carcelaria), no se excluyen
las demás funciones como fundamento de la misma
pena, sino que inspira que sean la prevención
especial y la reinserción, criterios
incluyentes, en la determinación, o individualización
de la pena privativa de la libertad.

3.7. Si bien es anterior que tanto para imponer,
como para ejecutar la prisión domiciliaria
en sustitución de la prisión carcelaria
deben tenerse en cuenta también las
funciones de la pena, que tienen que ver con
la prevención general y la retribución justa.

3.8. Independientemente de las actividades técnicas que

QUE SE TENDAN SOBRE LOS CONCEPTOS BÁSICOS QUE INTEGRAN LAS FUNCIONES DE LA PENA LA DECISION DE POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO COLOMBIANO. EN CUANTO A LOS PRINCIPIOS Y LOS FINES DE LA PENA ES LA ADOPTACION EN LOS ARTICULOS 3 Y 4 DEL CODIGO PENAL. DESDE ESA OPTICA, LA FUNCION DE "RETRIBUCION JUSTA" QUE DEBE ASOCIARSE DE MANERA GENERAL EN LOS ESTADOS, CLARAMENTE DIFERENCIADOS DEL PROCESO PENAL. COMO FACTOR QUE INFLUYE EN LA DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA, EN CUANTO ES EN TAL MOMENTO QUE SE DETERMINE LA MEDIDA DE LA RETRIBUCION Y SE DETERMINA SU CONTENIDO DE JUSTICIA. DE MANERA DE LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD; Y COMO FUNCION VINCULADA VAJA A ENJUICIARSE LA ADOPTACION DE PROVINCIA QUE ANTICIPEN MATERIAL Y CONTINGENTEMENTE UNA PARTE DE LA PRIVACION EFECTIVA DE LA LIBERTAD O LA SUBROGACION POR UN PERIODO DE PRUEBA - REPUBLICA DE COLOMBIA CASACION 34962 M.P. JAMES GUARIN VASQUEZ Y OTROS CONTRA SUPREMA DE JUSTICIA.

IGUALMENTE OCURRE CON LA FUNCION DE "PREVENCION GENERAL", A TRAVES DE LA CUAL SE ADVIERTE A LA SOCIEDAD DE LAS CONSECUENCIAS REALES QUE PUEDE SOPORTAR CUALQUIERA QUE INCURRA EN UNA CONDUCTA PUNITIVA: PRINCIPALMENTE EL NOMBRE SE VE COMPULSADO A PROTEGER LA SOCIEDAD MEDIANTE LA AMENAZA A LOS INDIVIDUOS QUE LA COMPONEN. POR QUE EL ORDEN JURIDICO ES UN SISTEMA QUE OPERA BAJO UNA FORMULA ACCION, REACCION, SUPUESTO, CONSECUENCIA JURIDICA. ESE FIN DE "PREVENCION GENERAL"

ES IGUALMENTE APRECIABLE TANTO PARA LA DETERMINACION

NACION, JUDICIAL DE LA PENA COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, PUES SE PREVIENE NO SOLO POR LA IMPOSICION DE LA SANCION, SINO Y SOBRE TODO, DESDE LA CERCERIA, LA EJEMPLARIZACION Y LA MOTIVACION NEGATIVA QUE ESTA GENERA (EFECTO DISUASIVO) ASI COMO DESDE EL AVANCEMIENTO DEL ORDEN JURIDICO (FIN DE PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA)". CASACION N° 34962 MP. JAMES GUARIN VÁSQUEZ y OTROS CONTRA SUPREMA DE JUSTICIA.

4. CON FUNDAMENTO EN LAS ANTERIORES REGLAS, EN NOMBRE PROPIO CUESTIONÓ QUE LOS DESPACHOS ACCIONADOS RESOLVIERAN NEGATIVAMENTE LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL PROVISIONAL, TENIENDO EN CUENTA SOLO LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA, SIN QUE SE VALORARA SU NIVEL DE RECLUSIÓN Y LA NECESIDAD DE COMPLETAR LA TOTALIDAD DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO RECLUSIVO.
- 4.1. ASI MISMO, INDICÓ QUE TAL DECISION TAMBIÉN CONTIENE A "UN DEFECTO SUBSTANTIVO POR INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL INADMISIBLE, AL AFIRMAR QUE EL BENEFICIO QUE EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL DEBE NEGARSE POR EL SOLO HECHO DE QUE LA CONDUCTA HAYA SIDO CALIFICADA COMO GRAVE POR EL JUEZ QUE IMPUSO LA CONDENA PENAL, ARGUMENTO, SEGUN SOSTUVO, QUE DESCONOCE EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL QUE RESALTA LA PREVALENCIA DEL COMPONENTE RESOCIALIZADOR.
- 4.2. UN EJERCICIO RAZONABLE DE VALORACION, COMO EL QUE RECLAMA LA CORTE CONSTITUCIONAL A LOS JUECES DE EJECUCION DE PENAS, REQUIERE PONDERAR LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA JUNTO CON TODAS LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS

CIAS relevantes, de modo que se tenga un panorama global que armonice la retroacción que dejó cometido con la inclusión del contenido a la sociedad.

4.3. Defecto sustantivo por evidente contradicción entre los fundamentos de la sentencia de condena y la calificación como "grave" de la conducta punible por parte de las despachos, accionados. Sentado en nombre propio que la calificación de la conducta como grave realizada por las instancias judiciales demandadas que sustentan en consideraciones retóricas y conjeturas generales acerca del impacto del comportamiento ilícito, por el que se le condena, al igual que su naturaleza y motivación del mismo, en la sociedad colombiana, que no se corresponde con el análisis que se espera del juez al momento de resolver una solicitud de libertad condicional.

4.3. Es referencia y respuesta a la gravedad del tipo del comportamiento ilícito de varias sentencias. Acumuladas constituye una imprecisión sustantiva en lo que respecta a la calificación de la conducta, atribuida al condenado, en tanto contradice los fundamentos en la clasificación punitiva trazados por la sentencia de condena y acumulación jurídica de penas.

4.3. Ahora la gravedad de la conducta atribuida al accionado es contradictoria con los fundamentos y la clasificación presentados en la sentencia condenatoria y acumulación jurídica de penas, pues, en efecto, los hechos en concreto por los que fue condenado (i) no se encuentran excluidos por el legislador de los

SUSCRITOS PENALES.

5. PROCEJENCIA DE LA TUTELA

La Tutela, en el presente caso, procede por cumplirse las exigencias legales:

- a) NO HAYE OTRO MEDIO DE DEFENSA EFICAZ, SI SE TIENE EN CUENTA EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL.
 - b) Los derechos vulnerados con la decisión unilateral de las entidades demandadas, son de los llamados fundamentales, regulado en el Título II, "De los derechos, las garantías y los deberes" Capítulo I, De los derechos fundamentales Artículo 25 y 29 de la norma superior.
 - c. Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
6. Desconocimiento del precedente constitucional y efecto sustantivo por interpretación inadmisible. De un lado el SENTENCIADO BEBIERE ABOUNAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS QUE SE HA PRONUNCIADO A FAVOR DE LA IMPUTACIÓN DE BUSCAR LA RESOCIALIZACIÓN DEL CONDENADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. ASI, MENCIONO LAS SENTENCIAS C-261 DE 1996, C-806 DE 2002, C-328 DE 2016 y T-718 DE 2015. De otro lado, mencio. NO EL CAMBIO JURISPRUDENCIAL PUESTO EN LA SENTENCIA

C- 757 de 2014, en relación con la valoración de la conducta punitiva que corresponde realizar al juez de ejecución de penas, y que anteriormente había sido objeto de análisis en la sentencia C-194 de 2005, a partir de las anteriores providencias explico las subselas que es posible derivar del precedente constitucional fijado en relación con el concepto de la libertad condicional.

(i) El ejercicio punitivo del estado responde a varias finalidades, dentro de las cuales la resocialización del infractor prevalece, especialmente durante la etapa de ejecución de la pena. La valoración de la conducta punitiva exige tener como eje fundamental el carácter resocializador de la pena, así como las características propias de la reclusión justa, las cuales deben armonizarse de forma razonable. En esta medida, el estudio del juez de ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado, sino desde la necesidad de convivir con la pena impuesta.

(ii) La valoración de la conducta punitiva que habrán los jueces de ejecución para decidir sobre la libertad condicional de los condenados demanda una ponderación razonable entre la conducta punitiva y el nivel de resocialización del condenado. Ello supone tener un panorama claro que atienda todas las circunstancias, elementos y consideraciones presentadas por el juez en la sentencia condenatoria, no solo las perjudiciales al proceso, sino también las que le son favorables, así como aquellas asociadas con posterioridad a su reclusión en un centro carcelario.

7. En todo caso, la decisión de una solicitud

de libertad condicional concreta además de lo anterior, deberá atender al principio de máxima utilidad conforme a los artículos 29 de la Constitución Política y 6 del Código Penal, según los cuales en materia penal "la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable" lo que también cabe para las condenas.

8. Solicito al señor Juez tutelar mis derechos fundamentales, a la dignidad humana, al debido proceso, y libertad y como consecuencia de ello.

I. impartir orden penitenciaria para que se conceda la libertad condicional a la cual tengo pleno derecho.

Pruebas:

1. Decisión del recurso de apelación donde se confirma de fecha 16 de febrero de 2022. Tribunal Superior de Villavicencio.
2. Resuelve de Habeas Corpus del 21 de abril de 2022.

Juramento:

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he formulado acción de tutela por los mismos hechos y derechos de que trata esta acción.

RESPECTUosamente: Germán Bonilla

C.C. No: 2239580

Receptor: Edmundo ALARCOS-META
Aguilón: Pablo. I.

T. No: 15578



Estado Judicial
Corte Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE
VILLAVICENCIO

-SALA DE DECISION PENAL No 1-

Magistrada Ponente: Yenny Patricia García Osílora
Radicación: 730013107002 200700048 01
Procedencia: Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías
Motivo de alzada: Libertad condicional
Condensado: Germán Bonilla Martínez
Delito: Secuestro simple y otros
Decisión de la Sala: Confirma
Aprobado: Acta No. 081 de 2022

Villavicencio, dieciséis (16) de febrero de dos mil veintidós (2022)

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Germán Bonilla Martínez, en contra del auto proferido el veintidós (23) de noviembre de dos mil veintuno (2021), por medio del cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías - Meta, le negó la libertad condicional.

II. ANTECEDENTES.

El veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012) el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Tunja, acumuló en trescientos doce (312) meses y ocho punto cinco (8.5) días de prisión cuatro (4) condenas impuestas a Germán Bonilla Martínez, así:

Primer proceso 2007048: Por hechos ocurridos el catorce (14) de enero de dos mil seis (2006), fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué - Tolima, mediante sentencia del veintiocho (28) de mayo de dos mil nueve (2009), a la pena de trece (13) años siete (7) meses y veintinueve

Radicado: 73 001 31 07 002 2007 00048 01
Condensado: Germán Bonilla Martínez
Delito: Secuestro simple y otros
Decisión: Confirma

(24) días de prisión, como coautor de la conducta punible de secuestro simple, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso personal y concierto para delinquir.

Segundo Proceso 2007137: Por hechos ocurridos el quince (15) de enero de dos mil seis (2006), fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué - Tolima, mediante sentencia del dieciséis (16) de agosto de dos mil siete (2007), a la pena principal de diez (10) años de prisión, como coautor del delito de secuestro simple en concurso homogéneo y heterogéneo con hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.

Decisión confirmada por el Tribunal Superior de Ibagué, el treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008).

Tercer Proceso 20110046: Por hechos ocurridos el quince (15) de enero de dos mil seis (2006), fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Adjunto de Ibagué - Tolima, mediante sentencia del treinta (30) de diciembre de dos mil once (2011), a la pena principal de nueve (9) años siete (7) meses y seis (6) días de prisión, como coautor del delito de secuestro simple en concurso homogéneo y heterogéneo con hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.

Cuarto Proceso 200300173: Por hechos ocurridos el veintiséis (26) de enero de dos mil cinco (2005), fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá - Cundinamarca, mediante sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos mil seis (2006), a la pena principal de sesenta y tres (63) meses y once (11) días de prisión, como coautor del delito de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas.

Actualmente vigila la ejecución de la sanción el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías - Meta.

La dirección del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Aceñas - Meta, el veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021), remitió documentación para el análisis de la libertad condicional y redención de pena a favor de sentenciado.

II. DECISIÓN RECURRIDA.

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Aceñas - Meta, mediante auto del veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), negó la libertad condicional al penado Germán Bonilla Martínez.

El ejecutor le niega la libertad condicional al penado por no cumplir con las exigencias del artículo 64 del código penal, específicamente en virtud a la valoración de la conducta ejecutada (factor subjetivo).

Consideró que la conducta desarrollada por el penado de forma reiterada, se cataloga como de alto impacto social y advirtió que no puede soslayarse que sobre el condenado pesan varias condenas, que no obstante haber sido acumuladas no dejen de visualizar al infractor como una persona reiterativa en el comportamiento.

Además, concluyó que su actuar merece mayor reproche social, pues la utilización de armas de fuego, aunado a la privación de la libertad de locomoción de las personas, exponiendo la salud y vida de las víctimas, entraña mayor osadía e irrespeto por los derechos de los demás, en procura de lograr el cometido criminal del grupo conformado.

Destacó también que su conducta en los periodos comprendidos entre enero y julio de dos mil veintiuno (2021) fue calificada mala y regular, por lo que su desempeño durante el tratamiento penitenciario no ha sido favorable.

Con todo, concluyó que se hace necesario que Bonilla Martínez continúe con la

ejecución de la pena.

IV. DEL RECURSO INTERPUESTO.

Inconforme con la decisión, el condenado Germán Bonilla Martínez interpuso recurso de apelación, pidiendo su revocatoria y, como consecuencia de ello, que se le otorgara la libertad condicional.

El condenado mostró su inconformidad con la decisión adoptada, por cuanto según su dicho la conducta por la que fue condenado no ostenta la gravedad que destacó el *a quo*.

Resaltó las actividades intramurales que ha desarrollado y que permiten sostener que ha alcanzado su resocialización, información que no puede ser menospreciada ante la gravedad del comportamiento por el que fue condenado.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

5.1. De la competencia.

Al tenor de lo previsto en el artículo 80 de Ley 600 de dos mil (2000), la Sala ostenta competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado en contra del auto proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Aceñas.

5.2 Del problema jurídico.

Corresponde a la Sala en el presente asunto, determinar si fue acertada la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Aceñas, al negar la libertad condicional al sentenciado Germán Bonilla Martínez.

5.3 Del caso objeto de análisis.

En el asunto puesto a consideración y de cara al principio de favorabilidad, es claro que la normatividad aplicable, no es otra que la prevista en el artículo 30 de la Ley 1709 de dos mil novecientos veinticuatro (2014)¹, que modificó el artículo 64 de la Ley 599 de dos mil (2000) y que en materia de libertad condicional prevé:

«Artículo 64. Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su conducta durante el cumplimiento de la pena haya sido satisfactoria en el centro de reclusión permitiendo suponer fundamentadamente que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la decisión, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado;

El tiempo que falta para el cumplimiento de la pena se tendrá como período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario (resguarda firma de texto).

En desarrollo de tal preceptiva legal, el artículo 480 de la Ley 600 de dos mil (2000) establece:

«El condenado que se halle en las circunstancias previstas en el Código Penal, podrá solicitar al juez la ejecución de penas y medidas de seguridad, la libertad condicional acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.»

¹ Normatividad más favorable para los intereses del penado, tal y como lo reconoce la Corte Suprema de Justicia en decisión rad. 44195 del 3 de septiembre de 2014.

Al tenor de estos preceptos legales, se colige que el aludido sustituto penal exige para su concesión la confluencia de los siguientes presupuestos:

- i) Que la solicitud se allegue resolución favorable del consejo de disciplina del penado, copia de la cartilla biográfica y demás documentos relevantes de conformidad con lo expuesto en el artículo 480 de la Ley 600 de 2000;
- ii) Que el comportamiento mostrado por el penado durante el tratamiento penitenciario, así como la valoración efectuada a la conducta punible por la que se impuso sanción, permitan suponer fundamentadamente que no es menester seguir adelante con la ejecución de la pena.
- iii) Que el penado haya purgado las tres quintas (3/5) partes de la pena impuesta, para lo cual, deberá computarse el tiempo descontado físicamente y el redimido en actividades de trabajo, estudio y/o evasiva;
- iv) Que se haya reparado a la víctima por los perjuicios ocasionados con la conducta punible o se asegure el pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre la insolvencia económica del condenado.
- v) Que se encuentre demostrado el arraigo familiar y social del penado.

En este contexto, encuentra la Sala que para otorgar la libertad condicional el juez ejecutor, partiendo de la valoración de la gravedad de la conducta por la que se emitió condena, debe ponderar los elementos que certifican el comportamiento intramuros del sentenciado, aimingado a los requisitos objetivos que corresponden: i) al cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la pena impuesta, ii) al pago de los perjuicios derivados de la conducta punible y iii) a la demostración del arraigo social y familiar del condenado.

Por consiguiente, la disertación exigible se centra en realizar un diagnóstico pronóstico sobre el comportamiento del ejecutado posterior a la fecha en que comienza a purgar la pena impuesta, para, en este orden de ideas, determinar si el proceso de resocialización ha llegado a término de manera efectiva y, por ende, si la privación de la libertad ha cumplido con el objetivo de generarle una conciencia acurda de la lesividad de su comportamiento.

Ahora, respecto a la forma como debe abordarse la «previa valoración de la conducta punible», tema en el que se fundó la negativa, debe indicarse que el ejecutor en manera alguna puede realizar un análisis ajeno, apartado o que no corresponda a los límites impuestos por el juez de conocimiento al momento de proferir la sentencia, toda vez que los señalados en ese momento se erigen en el derrotero inicial, a partir del cual el operador judicial colige la necesidad de continuar o no con la ejecución de la sanción irrogada.

Sobre ese tópico en particular, la Corte Constitucional en sentencia C-195 de dos mil cinco (2005) señaló que:

«(...) En los mismos términos, cuando la norma causada dice que la libertad condicional podrá considerarse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad queda autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente de la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subsecuente penal.

Adicionalmente, el juicio que adelanta el juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento evaluado del condenado. En este contexto, el estudio del juez de Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado—resultado ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento—sino que de la necesidad de cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos ajenos a los ocurridos con posterioridad a la misma vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión.» (Resolución de la Sala).

Tal postura se mantuvo con el artículo 64 del código penal, modificado por la Ley 890 de dos mil cuatro (2004), e incluso con la variación introducida a partir de la Ley 1709 de dos mil cuatro (2014), lo cual se corrobora a través del pronunciamiento que en tal sentido efectuara el máximo órgano de la jurisdicción constitucional en sentencia C-757 de dos mil cuatro (2014), por medio de la cual analizó la exequibilidad del artículo 30 del referido compendio normativo, indicando lo siguiente en punto a la valoración de la conducta punible:

«(...) 22. Por lo tanto, para determinar si la norma que condiciona el otorgamiento de la libertad condicional a la valoración de la conducta punible por parte de los jueces de ejecución de penas vulnera el non bis in idem, la Corte entró a establecer si hay identidad de persona, hechos y causa. Como resultado de dicho análisis la Corte concluyó que la norma en cuestión no vulnera dicho principio.

Para la Corte, aunque hoy identidad de persona, no existe ni identidad de hechos, ni identidad de causa. No existe una identidad total de hechos en la medida en que si bien el juez de ejecución de penas debe valorar la conducta punible, debe analizarla como un elemento dentro de un conjunto de circunstancias. Sólo una de tales circunstancias es la conducta punible. Además de valorar la conducta punible, el juez de ejecución de penas debe estudiar el comportamiento del condenado dentro del penal, y en general considerar toda una serie de elementos posteriores a la imposición de la condena. Con fundamento en este conjunto de circunstancias, y no sólo en la valoración de la conducta punible, debe el juez de ejecución de penas adoptar su decisión. Al respecto dijo la Corte:

“Tal como ya se explicó, en este punto la Corte entiende que el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no cumple un mero papel de verificación matemática de las condiciones necesarias para conceder el beneficio de la libertad condicional. Tal vez ello ocurra con los requisitos objetivos para conceder tal beneficio el cumplimiento de los dos terceros partes de la condena y el pago de la multa, más la reparación a la víctima—pero, en tratándose de los requisitos subjetivos (confesiones; aceptación de los cargos; reparación del daño; contribución con la justicia; dedicación a la enseñanza, trabajo o estudio; trébas a la investigación; indole en ante el perjuicio; intentos de fuga; octo injustificado; comisión de otros delitos, etc.), dicha potestad es claramente valorativa. Ello significa que es el juicio del juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el que determina, en últimos, si el condenado tiene derecho a la libertad condicional.” Sentencia C-194 de 2005.

Adicionalmente, la Corte concluyó que tampoco existe identidad de causa, pues el objeto de la decisión en uno y otro caso es diferente. El proceso penal tiene por objeto determinar la responsabilidad penal del sindicado por la conducta que le está siendo imputada en el proceso, e imponerle una pena de conformidad con una serie de circunstancias predecibles de la conducta punible. Entre tanto, el juez de ejecución de penas le corresponde determinar si la ejecución de dicha pena es necesaria o no, una vez que la conducta ha sido valorada y la pena ha sido impuesta. Ello implica que no sólo se trata de causas diferentes, sino que el ejercicio de la competencia del juez penal limita los alcances de la competencia del juez de ejecución de penas. En primer lugar, porque el juez de ejecución de penas no puede valorar de manera diferente la conducta punible, ni puede tampoco sellarse del quantum punitivo determinado por el juez penal.

(...)

Por lo anterior, la Corte debe reiterar que una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la conducta punible como requisito para otorgar la libertad condicional no vulnera el principio de non bis in idem consagrado en el artículo 29 de la Constitución. En esa medida, los argumentos esbozados en la Sentencia C-124 de 2005, citada, resultan perfectamente válidos a son aplicables en su totalidad a la expresión demandada en esta solicitud. Por lo tanto, desde esta punto de vista el cargo esgrimido no está llamado a prosperar. (Negrilla y subrayado del Despacho)

En ese mismo orden de ideas, es necesario reiterar que dicha valoración no vulnera el principio del juez natural establecido en el artículo 29 de la Constitución, en concordancia con el principio de reparación de poderes establecido en el inciso Primero del artículo 113.

Entiende, entonces la Sala que la valoración de la gravedad de la conducta punible por parte del Juez no implica una nueva evaluación de la responsabilidad penal de quien fue condenado o una novedosa consideración a propósito de los hechos que dieron lugar a la sentencia. La argumentación que sobre el punto desarrolla el operador judicial se limita a recoger los planteamientos del juez que emitió en primera instancia la condena, ya que, se reitera, fue aquel quien fijó los límites de la estructuración de la conducta y por consiguiente su gravedad.

En otras palabras, la consideración que realiza el Juez ejecutor se ubica en un contexto distinto y, por lo tanto, en una fase diferente a la etapa de juzgamiento, pues, se insiste, el fin de valorar la conducta y realizar la ponderación con el comportamiento desplegado por un condenado, no es otro diferente al de definir si existe la necesidad de cumplir a cabalidad la pena interpuesta o si, por el contrario, el sentenciado ya se encuentra en condiciones de reincorporarse a la sociedad.

Con todo, el juez debe analizar cada uno de los requisitos previstos legalmente, ya sea objetivo o subjetivo, en conjunto, como recientemente lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, quien por vía de tutela precisó que la valoración de la conducta punible tiene igual peso que los demás requisitos establecidos para su

concesión.

A ese respecto, la decisión STP 15806 – 2019 del diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), M.P. Dra. Patricia Salazar Cuellar, expresó lo siguiente:

«En suma, esta Corporación debe advertir que:

i) No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la lesión a la libertad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ella solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.

En esta sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de los distintos puntos que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;

ii) La lesión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;

iii) Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan medir la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de reinserción.

Por tanto, la sola lesión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como, motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.

Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no pueda quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.

iv) El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en su contexto y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado».

Postura reiterada por la alta Corporación de la justicia ordinaria penal, en auto AP4142-2021, radicado 59888, del quince (15) de septiembre de dos mil veintuno (2021), al precisar:

«Así, es claro que para la concesión de la libertad condicional, resulta imperioso que el juez valore la conducta por la cual se emitió la condena, no obstante, se insiste, tal examen debe diferenciarse de cara a la necesidad de cumplir una función ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y ciego examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad y las circunstancias de orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptación social, por lo que en la apreciación de estos factores debe configurarse el aspecto social que genera la comisión del delito bajo la égida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes».

Con fundamento en lo expuesto, a juicio de la Sala le asistió razón al a quo al negar la libertad condicional a Bonilla Martínez, acorde a la valoración de la conducta que realizó el juez fallador, toda vez que la misma resulta de importante lesividad, impidiendo que, al menos por ahora, se suspenda el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido.

Nótese, entonces, como el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, al momento de proferir la sentencia del veintiocho (28) de mayo de dos mil nueve (2009) – esto es la condena más grave acumulada– destacó la mayor gravedad del comportamiento desplegado por el condenado, resaltando que «la variedad del crimen salta de hulto al resultar varias personas indiscriminadamente afectadas en su libertad de locomoción».

Así pues, en el proceso de dosificación punitiva, dadas esas consideraciones el fallador no impuso el límite mínimo del cuarto seleccionado (12 años) sino que se aumentó en dos (2) años más, para un total de estorece (14) años.

Adicionalmente, en el fallo acumulado proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá el treinta y uno (31) de julio de dos mil seis (2006), se destacó:

³ CSJ AHP5065-2021

«El Deputado decide no permitir del mínimo de la pena, ya que la conducta desplegada por los perpetradores es de aquellas de alta gravedad, generan pánico en la sociedad, crea en sus víctimas un estado de zozobra, y, entendiendo a que existen dos causas de agravación, como ya quedó establecido, se decide imponer, en principio, pena de ochenta y cuatro (84) meses de prisión ...»

Es decir, se impuso en esa oportunidad veintiocho (28) meses de prisión sobre el extremo mínimo (56 meses). En ese orden, para esta Sala, como lo fue para el juez a quo, el comportamiento desplegado por el condenado (*secuestro simple en concurso homológico, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego*), del que no es posible discutir su responsabilidad en esta sede, pues está ya quedó declarada, generó una grave afectación a los bienes jurídicos tutelados, en la medida que integró un grupo criminal para afectar, por lo menos tres (3) bienes jurídicos protegidos por el legislador, como lo son, la libertad individual, el patrimonio económico de las víctimas y la seguridad pública.

Tal realidad, permite sostener que en verdad la valoración de la conducta punible desarrollada por Bonilla Martínez, no puede dejarse de lado ni obviarse, es necesario como lo prevé la norma analizada es típico, pues si ello no fuera así, no se explicaría su inclusión por el legislador como presupuesto para la concesión del beneficio, y en este asunto, dicho criterio evidencia el modo de ser del penado al interior de la sociedad, el que se cimienta en importantes niveles de lesividad, generando la necesidad de mantener el tratamiento intramural con miras a dar cabida a las funciones de reinserción y resocialización imperantes en este momento de la actuación (artículo 4 del código penal).

Bajo tal orden, resulta claro que hizo bien el Juez Ejecutor al no otorgar la libertad condicional a Germán Bonilla Martínez, pues si bien su conducta penitenciaria ha sido buena, de ahí que se emitiera concepto favorable para la concesión del sustitutivo en condena, y se le reconociera redención de pena por su buen rendimiento, lo cierto es que en su caso la ponderación del comportamiento ilícito

por el que se lo condenó, al igual que su naturaleza y modalidad del mismo, permiten concluir que resulta necesaria la continuación de la ejecución de la pena.

Restaría por indicar, que el análisis realizado en manera alguna vulnera el principio del *non bis in idem* o el derecho al debido proceso que ostenta Germán Bonilla Martínez, pues al realizar la ponderación de la valoración de la conducta y el proceso de resocialización llevado a cabo por este¹, por el momento resulta preponderante el accionar por el desplegado, razón por la que la Sala confirmará la decisión recurrida.

Acorde a lo expuesto, el Tribunal encuentra que el auto recurrido resulta ajustado a la legalidad, motivo por el cual le impartirá confirmación integral.

Consideración final

Revisadas las piezas procesales atribuidas a esta Corporación encuentra la Sala que existe al parecer una identidad de hechos en los fallos acumulados del treinta (30) de diciembre de dos mil once (2011) y dieciséis (16) de agosto de dos mil siete (2007), situación que deberá ser objeto de verificación por el *a quo*, y establecida con claridad dicha eventualidad se le informará al penado la real situación, para los fines que considere pertinentes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio,

RESUELVE

Primero. Confirmar la decisión adoptada el veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintuno (2021), por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de

¹ Calificada en cédulas de mala y regular entre enero y julio de 2021.

Seguridad de Acacías - Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de este provido.

Segundo. Dese cumplimiento al acápite de otra consideración. Devuélvase la actuación al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías.

Tercero. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

PENNY PATRICIA GARCÍA OTÁLORA
Magistrada

MARISTELLA VARGAS GUTIÉRREZ
Magistrada

PATRICIA RODRÍGUEZ TORRES
Magistrada



Acacias, veintuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

1.- ASUNTO:

Se resuelve la acción constitucional de Habeas Corpus promovida por GERMÁN BONILLA MARTÍNEZ, actualmente recluso en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Acacias.

2.- DE LA SOLICITUD:

Manifiesta el libelista que por auto No. 2835 del 23 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, encargado de vigilar la pena que le fue impuesta, negó su libertad condicional por valoración de la conducta. Inconforme, afirma el libelista, la impugnó, siendo confirmada por el Tribunal Superior de Villavicencio.

Después de definir el beneficio de la libertad condicional, afirma que en su caso se satisfacen las exigencias establecidas en la ley, relievando que supera las 3/5 partes de purga de la pena impuesta, que equivale a 187 meses y 11 días, toda vez que a la actualidad ha descontado 194 meses y 11 días físicos más 46 meses y 24 días por redención.

Censura que el ejecutor, al abordar el estudio del cumplimiento del requisito objetivo, identifica "...como grave el despliegue conductual en un aspecto muy genérico sin identificar realmente la atribución fáctica a la misma, no obstante de haber reconocido que el sentenciado acredita la ejecución de labores propias de redención de penas, concepto favorable de las directivas del reclusorio para la concepción (sic) de la libertad condicional y progreso en su red social resocialización..."

Con apoyo jurisprudencial, estima que en su caso se cumplen las exigencias para obtener el subrogado demandado, por lo que, por la vía de la acción de Habeas Corpus solicita "...la libertad condicional debido a que se está prolongando."

3.- DE LAS RESPUESTAS REQUERIDAS POR EL JUZGADO

3.1.- Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias

A través de oficio No.098, del 21 de abril, el titular del Juzgado accionado informó que GERMÁN BONILLA MARTÍNEZ cumple pena acumulada¹ de 312 meses y 08.5 días de prisión, la cual ha empezado a descontar desde el 27 de enero de 2006.

¹ Se trata de cuatro sentencias condenatorias impuestas por los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, Primer Penal del Circuito Especializado de Ibagué, Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá y Segundo Penal del Circuito Especializado Adjointo de Ibagué, en las fechas 28 de mayo de 2009, 16 de agosto de 2007, 31 de julio de 2006 y 30 de diciembre de 2011, respectivamente.

Afirmó que el 23 de noviembre de 2021, por auto No. 2835, el despacho negó libertad condicional a la PPL por incumplir el requisito de la valoración de la conducta punible, decisión que apelada fue resuelta por el Tribunal Superior el 16 de febrero de 2022, confirmando.

Precisó que, a la fecha, el accionante ha descontado 241 meses y 10.24 días del total de su pena, por lo que no la ha cumplido en su totalidad.

Anejó copia de las providencias aludidas.

3.2.- Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Media Seguridad de Acacias

Por oficio 148-OAJUR- de 20 de abril, el Asesor Jurídico del penal informó al Juzgado que GERMÁN BONILLA MARTÍNEZ se encuentra privado de la libertad en el reclusorio purgando pena acumulada de 312 meses de prisión.

Después de discriminar las cuatro penas objeto de acumulación, afirmó que, en razón del proceso actual, la PPL se halla privada de su libertad desde el 27 de enero de 2006 a la fecha y la vigilancia de la pena corresponde al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias bajo el NI. 2020-00117.

4.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

El Juzgado es competente para pronunciarse de fondo sobre la acción incoada de conformidad a lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 2º de la ley 1095 de 2006.

2.- Problema jurídico

Corresponde al Juzgado establecer si a la actualidad se encuentra transgredido el fundamental derecho a la libertad del señor GERMÁN BONILLA MARTÍNEZ.

3.- De la acción de Habeas Corpus

El derecho fundamental a la libertad tiene como instrumento para su protección la figura del Habeas Corpus que se deriva de las previsiones del artículo 30 Superior, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas".

De igual forma, la acción constitucional por la que ha optado el actor ha tenido desarrollo legal a través de la expedición de la Ley 1095 de 2006, que en su artículo 4º ha establecido

Habeas corpus 50 006 31 87 002 2022 00065 00 3
los presupuestos de orden formal que en la petición o escrito de Habeas Corpus se deben cumplir.

Además, el aludido precepto legal prevé, de manera expresa, que la ausencia de uno de tales requisitos no se puede constituir en barrera que impida adelantar el correspondiente trámite del Habeas Corpus, si la información que se suministra resulta ser suficiente para ello.

Un punto del cual debe partirse es que la acción pública que en la actualidad ejerce el libelista, busca proteger el derecho fundamental a la libertad de las personas mediante dos escenarios diversos: El primero, cuando la captura se ataca como ilegal y el segundo, cuando existe una prolongación ilícita de la libertad.

Dicha afirmación encuentra su basamento en la decisión de Habeas Corpus del 29 de abril de 2013 (radicado 41223) proferida por la magistrada María del Rosario González Muñoz, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que expresó:

"El habeas corpus procede, según lo establecido en el artículo 1º de la precitada disposición legal, en dos situaciones; en primer lugar, cuando la privación de la libertad se produce con violación de las garantías constitucionales o legales y, en segundo término, cuando ésta se prolonga ilegalmente."

En otros términos, el Habeas Corpus, al tenor del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006, no es un instrumento cualquiera, ni un recurso adicional con el que cuentan los ciudadanos en defensa de sus garantías constitucionales, sino un derecho fundamental, a la vez que una acción constitucional pública excepcional, dirigida de manera exclusiva a la protección de la libertad personal.

No otra cosa puede concluirse cuando por el referido artículo 1º de la Ley 1095 de 2005 se prevé:

"El Habeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine."

El Habeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción". (Negrillas ajenas al texto original).

4.- Del caso en concreto

Carrera 20 número 13 – 42, teléfono (8) 6569027E.
mail:fp2empnacacias@cendal.ramajudicial.gov.co

Habeas corpus 50 006 31 87 002 2022 00065 00 4
4.1.- En el caso que concita la atención del Juzgado, el promotor del amparo expresa que la acción de Habeas Corpus que interpone es procedente para obtener su libertad, pues, no obstante haberse negado su solicitud de libertad condicional en primera y segunda instancia, cumple con los requisitos establecidos en la ley, lo que le permite afirmar que a la actualidad se está prolongando su privación.

Descorriendo el traslado, el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, informó que vigila la pena al libelista, de la cual, a la fecha, no ha descontado su totalidad. También expresó que por auto No. 2835, negó libertad condicional a la PPL, por incumplir el requisito de la valoración de la conducta punible, providencia que fue confirmada por su superior el 16 de febrero de 2022.

Por su parte, el Asesor Jurídico del Penal en el que se encuentra recluso el accionante, confirmó que la PPL, se halla privada de la libertad desde el 27 de enero de 2006, cumpliendo pena acumulada de 312 meses de prisión y a disposición del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias.

4.2.- Debe precisar el Juzgado que, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades accionadas, existe certeza que quien promueve la acción con la que persigue su libertad se encuentra capturado desde el 27 de enero de 2006, y que por redención de pena se le ha reconocido el término de 46 meses y 17.24 días.

Siendo ello así, al detraer el tiempo de privación de libertad junto con el reconocido como redimido, al término de la pena de prisión, existe certidumbre que éste no se ha descontado en su totalidad a la actualidad, por lo que su petición de libertad resulta improcedente, pues, precisese, la prolongación ilegal de la libertad se presenta, entre otros casos, cuando el confinado ha superado el monto total de la condena, lo que no tiene ocurrencia en el caso que se analiza.

Con todo, es necesario precisar que la solicitud de concesión de un subrogado como el de la libertad condicional no conlleva el advenimiento de decisión favorable o una modificación a la situación actual de reclusión por el simple hecho de su radicación ante la autoridad penitenciaria y/o judicial, pues, su alcance se reduce a una mera expectativa carente de contundencia para considerar consolidado el derecho a la libertad y entonces promover su reconocimiento por la vía del Habeas Corpus.

El promotor de la acción de Habeas Corpus no puede pretender desconocer la vigencia de la decisión que negó su libertad condicional, cobijada con la presunción de acierto y legalidad, cuánto más, porque, sometida al escrutinio de la segunda instancia, su confirmación fue integral.

La acción promovida por la PPL, tergiversa la finalidad perseguida por el mecanismo de protección previsto en el artículo 30 Superior, desarrollado por la Ley 1095 de 2006, al

Carrera 20 número 13 – 42, teléfono (8) 6569027E.
mail:fp2empnacacias@cendal.ramajudicial.gov.co

Habeas corpus 50 006 31 87 002 2022 00065 00 5
considerarla una tercera instancia en la cual vuelvan a analizarse los argumentos de su petición liberatoria, en una clara muestra de abuso de las vías de derecho.

Por lo anterior, corresponde prevenir al accionante para que, en lo sucesivo, se abstenga de acudir a la excepcional acción de Habeas Corpus cuando pretenda cosa distinta a la efectivización de su derecho a la libertad por ilegal privación, so pena de la compulsación de copias al Establecimiento de Reclusión para que se adelante la investigación disciplinaria a que haya lugar.

5.- Precisión sobre la omisión de la entrevista

Con todo, debe precisar quien suscribe esta providencia, que de las sendas respuestas brindadas por las autoridades convocadas, se obtuvieron los elementos cognitivos suficientes para proferir la presente decisión por lo que se hizo innecesaria la entrevista que regula el Estatuto del Habeas Corpus.

A lo anterior debe adicionarse que, a partir del factum expuesto por el accionante, se abdujo que la situación a resolver comportaba eminente carácter jurídico.

En consecuencia, se declarará la improsperidad de la acción, lo que pasa a hacerse a continuación.

A mérito de lo expuesto el **JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS - META,**

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción constitucional de Habeas Corpus promovida por GERMÁN BONILLA MARTÍNEZ.

SEGUNDO.- PREVENIR a GERMÁN BONILLA MARTÍNEZ para que, en lo sucesivo, se abstenga de acudir a la excepcional acción de Habeas Corpus cuando pretenda cosa distinta a la efectivización de su derecho a la libertad por ilegal privación, so pena de la compulsación de copias al Establecimiento de Reclusión para que se adelante la investigación disciplinaria a que haya lugar por su presunta incursión en abuso de las vías de derecho.

TERCERO.- PRECISAR que, de conformidad a las previsiones del artículo 7 de la Ley 1095 de 2006, la presente decisión puede ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Por Secretaría oportunamente librense las notificaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,


CARLOS ANDRÉS OSPINA VILDAMÍL
Juez

Correa 20 número 13 - 42, teléfono (8) 6569027E.
mail:02@mecacos@ceudo.cajamajal.gov.co